

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES

Convocatoria: Orden PJC/215/2024, de 20 de febrero, (BOE del 8 de marzo)



Proceso selectivo para ingreso por el sistema de turno libre, en el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia

Primer ejercicio

Día 19 de octubre de 2024

ADVERTENCIAS:

- 1. NO ABRA ESTE CUESTIONARIO HASTA QUE SE LE INDIQUE.** Para hacerlo deberá rasgar la línea de puntos del margen derecho.
- 2. Utilice exclusivamente bolígrafo azul o negro. Antes de comenzar lea detenidamente las instrucciones que figuran al dorso de la Hoja de Examen.**
- 3. Todas las preguntas del ejercicio tienen el mismo valor. Se evaluarán las 100 primeras preguntas, las 4 últimas serán de reserva.**
- 4. El presente ejercicio se puntuará de 0 a 20 puntos. Sólo se calificarán las preguntas marcadas en la Hoja de Examen. Las preguntas acertadas se valorarán con 0,2 puntos; las preguntas no acertadas descontarán 0,066 puntos; las preguntas no contestadas no serán puntuadas.**
- 5. Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la "Hoja de Examen" es el que corresponde al número de pregunta del Cuestionario.**
- 6. Recuerde que el tiempo de realización de este ejercicio es de 120 minutos.**

- Este cuestionario es propiedad del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
 Queda prohibida la reproducción total o parcial de este cuestionario incluso citando la procedencia.

1.- La Constitución Española de 1978:

- a) Ha sido reformada en tres ocasiones.
- b) No ha sido reformada nunca.
- c) Ha sido reformado el título preliminar.
- d) No es posible la reforma de la Constitución Española.

2. Según el artículo 81 de la Constitución Española, ¿qué materia NO es objeto de ley orgánica?

- a) La regulación de los Estatutos de Autonomía.
- b) La regulación general tributaria.
- c) La regulación del régimen electoral general.
- d) La regulación relativa al desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas.

3. ¿Cuándo se declara el estado de alarma, ¿qué derechos fundamentales pueden ser suspendidos según el artículo 55 C.E.?:

- a) Derecho a la libertad y a la seguridad.
- b) Derecho a la reunión pacífica y sin armas.
- c) Derecho a la libertad de expresión.
- d) No puede suspenderse ningún derecho fundamental.

4. La Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, indica que el ejercicio del derecho a la rectificación registral de la mención relativa al sexo estará condicionado:

- a) A la solicitud, previa exhibición de informe médico o psicológico relativo a la disconformidad con el sexo.
- b) A la previa modificación de la apariencia de la persona a través de procedimientos médicos, quirúrgicos o de otra índole.
- c) A la previa modificación de la función corporal de la persona a través de los procedimientos médicos, quirúrgicos o de otra índole.
- d) A la solicitud de la persona legitimada ante el encargado del registro civil.

5. En relación a las Cortes Generales, ¿Qué afirmación NO es correcta?:

- a) El Senado es la cámara de representación territorial.
- b) En cada provincia se elegirán tres senadores por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto por los votantes de cada una de ellas.
- c) La elección de los diputados se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional.
- d) El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones.

6. En relación al control político del gobierno, indique cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA.

- a) La moción de censura deberá ser propuesta, al menos, por la décima parte de los Diputados en escrito motivado dirigido a la Mesa del Congreso y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno.
- b) Dentro de los tres días siguientes a la presentación de la moción de censura podrán presentarse mociones alternativas.
- c) El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear una única cuestión de confianza por cada año de legislatura.
- d) Si transcurrido el plazo de un mes, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras.

7. Según el artículo 147 de la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía:

- a) Deberán contener la denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica, la delimitación de su territorio, la denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias, las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas.
- b) Serán la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma pero no serán fuente de derecho.
- c) Deberán contener la denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica, la delimitación de su territorio, la denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias y la lengua oficial de la Comunidad Autónoma.
- d) Serán la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y su reforma se realizará según el procedimiento establecido en el mismo mediante ley ordinaria.

8. En relación a las donaciones privadas a los partidos políticos reguladas en el artículo 5 de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de partidos políticos, señala la respuesta CORRECTA:

- a) Todas las donaciones que reciban los partidos políticos, superiores a 25.000 euros, y, en todo caso, las donaciones de bienes inmuebles, deberán ser objeto de notificación al Tribunal de Cuentas por el partido político en el plazo de tres meses desde su aceptación.
- b) Los partidos políticos podrán aceptar las donaciones anónimas, finalistas y revocables.
- c) Los partidos políticos podrán aceptar o recibir donaciones de entes sin personalidad jurídica.
- d) Los partidos políticos siempre podrán aceptar donaciones procedentes de una misma persona, en especie, de bienes muebles, sin limitación de cuantía.

9. Según el artículo 9 de la Ley que regula el régimen electoral general 5/1985, de 19 de junio, el Secretario de la Junta Electoral Central es:

- a) El Secretario General del Congreso de los Diputados.
- b) El Magistrado del Tribunal Supremo más moderno en el escalafón.
- c) El vocal de la Junta Electoral Central más votado en la sesión de constitución.
- d) El Secretario de Gobierno del Tribunal Supremo.

10. Según el artículo 113.2 de la Ley reguladora del régimen electoral general 5/1985 de 19 de junio, ¿qué pronunciamiento NO puede contener la sentencia que se dicte en el recurso contencioso-electoral interpuesto contra los acuerdos de las Juntas Electorales sobre proclamación de electos, así como sobre la elección y proclamación de los Presidentes de las Corporaciones Locales?

- a) Inadmisibilidad del recurso.
- b) Estimación por defecto de forma en la elección celebrada y necesidad de efectuar nueva convocatoria en la circunscripción correspondiente o de proceder a una nueva elección cuando se trate de la del Presidente de una Corporación Local, en ambos casos dentro del plazo de tres meses.
- c) Nulidad de acuerdo de proclamación de uno o varios electos y proclamación como tal de aquél o aquéllos a quienes corresponda.
- d) Validez de la elección y de la proclamación de electos, con expresión, en su caso, de la lista más votada.

11. En virtud de lo dispuesto en el artículo 162.1 de la Constitución Española, NO está legitimado para interponer recurso de amparo:

- a) La persona natural o jurídica que invoque interés legítimo.
- b) La Asamblea legislativa de las Comunidades Autónomas.
- c) El Defensor del Pueblo.
- d) El Ministerio Fiscal.

12. Señale la respuesta CORRECTA en relación con las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional:

- a) Nunca tienen plenos efectos frente a todos.
- b) Tienen plenos efectos frente a todos aquéllas que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho.
- c) Tienen plenos efectos frente a todos las que declaren la inconstitucionalidad de una norma que no tenga fuerza de ley.
- d) Siempre tienen plenos efectos frente a todos.

13. Conforme al artículo 19 del Tratado de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, estará compuesto por:

- a) Al menos, dos jueces por Estado miembro.
- b) Un juez por Estado miembro.
- c) Por veintisiete jueces, pero no es necesario que representen a todos los Estados miembros.
- d) Sólo está compuesto por Abogados Generales.

14. Es función del Consejo Europeo:

- a) Representar a los Gobiernos de los Estados miembros.
- b) Definir la orientación y las prioridades políticas generales de la Unión Europea.
- c) Adoptar la legislación europea.
- d) Coordinar las políticas de la Unión Europea.

15. Para el examen de cada asunto sometido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, éste se constituirá en una sala compuesta:

- a) Por nueve Magistrados. La integrarán, de oficio, el Magistrado de la nacionalidad de cada Estado interesado o, en su defecto, una persona elegida por él para actuar en calidad de Magistrado; los nombres de los restantes Magistrados serán sacados a suerte por el Presidente antes de entrar a conocer del caso.
- b) Por siete Magistrados. La integrarán, de oficio, el Magistrado de la nacionalidad de cada Estado interesado o, en su defecto, una persona elegida por él para actuar en calidad de Magistrado; los nombres de los restantes Magistrados serán sacados a suerte por el Presidente antes de entrar a conocer del caso.
- c) Por nueve Magistrados. La integrarán, de oficio, los Magistrados sacados a suerte por el Presidente antes de entrar a conocer del caso. El Magistrado de la nacionalidad del Estado interesado no podrá formar parte de la Sala.
- d) Por siete Magistrados. La integrarán, de oficio, los Magistrados sacados a suerte por el Presidente antes de entrar a conocer del caso. El Magistrado de la nacionalidad del Estado interesado no podrá formar parte de la Sala.

16. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 236 quinquies de la Ley Orgánica del Poder Judicial, deberán facilitar a la Abogacía del Estado los datos personales, la información y los documentos que sean requeridos para el desempeño de la representación y defensa del Reino de España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y otros órganos internacionales en materia de protección de derechos humanos, en particular ante el Comité de Naciones Unidas:

- a) Los Letrados de la Administración de Justicia previa resolución judicial que así lo autorice.
- b) Los Letrados de la Administración de Justicia previa resolución judicial que así lo autorice y con informe favorable de la Fiscalía.
- c) Los Letrados de la Administración de Justicia sin necesidad de resolución judicial, en el ejercicio de sus propias competencias.
- d) Los Letrados de la Administración de Justicia previa resolución judicial que así lo autorice y previo informe de la Fiscalía.

17. Las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia estarán constituidas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por:

a) El Presidente del Tribunal Superior de Justicia, que la presidirá, por los Presidentes de las Salas existentes en el Tribunal Superior de Justicia, por los Presidentes de las Audiencias Provinciales de la Comunidad Autónoma, y por un número igual de magistrados o jueces, elegidos por todos los miembros de la Carrera Judicial destinados en ella, así como por los decanos que hayan sido liberados totalmente del trabajo que les corresponda realizar en el orden jurisdiccional respectivo.

b) El Presidente del Tribunal Superior de Justicia, que la presidirá, por los Presidentes de las Salas existentes en el Tribunal Superior de Justicia, por los Presidentes de las Audiencias Provinciales de la Comunidad Autónoma, y por un número igual de magistrados o jueces, elegidos por todos los miembros de la Carrera Judicial destinados en ella.

c) El Presidente del Tribunal Superior de Justicia, que la presidirá, por los Presidentes de las Salas existentes en el Tribunal Superior de Justicia, por los Presidentes de las Audiencias Provinciales de la Comunidad Autónoma, y por un número igual de magistrados o jueces, elegidos por todos los miembros de la Carrera Judicial destinados en ella, por los decanos que hayan sido liberados totalmente del trabajo que les corresponda realizar en el orden jurisdiccional respectivo, así como por el Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma.

d) El Presidente del Tribunal Superior de Justicia, que la presidirá, por los Presidentes de las Salas existentes en el Tribunal Superior de Justicia, por los Presidentes de las Audiencias Provinciales de la Comunidad Autónoma, y por un número igual de magistrados o jueces, elegidos por todos los miembros de la Carrera Judicial destinados en ella, por los decanos parcial o totalmente liberados del trabajo que les corresponda realizar en el orden jurisdiccional respectivo, así como por el Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma.

18. La declaración de hechos probados contenida en la resolución que ponga término al procedimiento penal, según lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 796/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de régimen disciplinario del personal al servicio de la Administración de Justicia:

a) Vinculará a la resolución que se dicte en el expediente disciplinario solamente en el caso de que ambos procedimientos se hayan seguido por hechos idénticos.

b) Vinculará a la resolución que se dicte en el expediente disciplinario cuando coincida la calificación jurídica de los hechos efectuada en una y en otra vía.

c) Vinculará a la resolución que se dicte en el expediente disciplinario, sin perjuicio de la distinta calificación jurídica que puedan merecer en una y en otra vía.

d) Vinculará a la resolución que se dicte en el expediente disciplinario cuando coincida la calificación jurídica de los hechos efectuada en una y en otra vía por el Ministerio Fiscal.

19. La pérdida de la condición de funcionario del expedientado durante la tramitación del procedimiento disciplinario determina, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto 796/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de régimen disciplinario del personal al servicio de la Administración de Justicia:

- a) El archivo de las actuaciones sin que en ningún caso pueda continuar la tramitación del expediente.
- b) El archivo de las actuaciones, salvo que el interesado inste de forma motivada la continuación del expediente.
- c) El archivo de las actuaciones, salvo que el instructor del expediente acuerde de oficio y de forma motivada, la continuación del expediente.
- d) El archivo de las actuaciones, salvo que el instructor del expediente, a instancia del Ministerio Fiscal, acuerde de forma motivada, la continuación del expediente.

20. A los efectos del Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, por el que se regula el sistema LexNET, se entenderá por “profesionales de la justicia”:

- a) Abogados, Procuradores, Graduados Sociales, Cuerpo de Abogados del Estado, Letrados de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas y Letrados del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, de las demás Administraciones públicas, de las Comunidades Autónomas o de los Entes Locales, así como los Colegios de Procuradores, y los administradores concursales.
- b) Abogados, Procuradores, Graduados Sociales, Médicos Forenses, Cuerpo de Abogados del Estado, Letrados de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas y Letrados del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, de las demás Administraciones públicas, de las Comunidades Autónomas o de los Entes Locales, así como los Colegios de Procuradores.
- c) Abogados, Procuradores, Graduados Sociales, Médicos Forenses, Ministerio Fiscal, Cuerpo de Abogados del Estado, Letrados de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas y Letrados del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, de las demás Administraciones públicas, de las Comunidades Autónomas o de los Entes Locales y Letrados de las empresas públicas.
- d) Abogados, Procuradores, Cuerpo de Abogados del Estado, Letrados de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas y Letrados del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, de las demás Administraciones públicas, de las Comunidades Autónomas o de los Entes Locales, así como los Colegios de Procuradores, los administradores concursales, Notarios y Registradores.

21. Según dispone el artículo 7 del Real Decreto 396/2013, de 7 de junio, por el que se regula el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica, estarán representados en el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica:

a) El Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, la Fiscalía General del Estado Y las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Administración de Justicia.

b) El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Administración de Justicia y la Abogacía General del Estado.

c) El Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el Consejo Fiscal y las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Administración de Justicia.

d) El Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, la Fiscalía General del Estado, las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Administración de Justicia y la Agencia Española de Protección de Datos.

22. Señala cuál de las siguientes opciones es CORRECTA, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 796/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de régimen disciplinario del personal al servicio de la Administración de Justicia:

a) Además de los autores, serán responsables disciplinariamente los superiores únicamente cuando consintieran las faltas muy graves si de dichos actos se derivan graves daños para la Administración o los ciudadanos.

b) Además de los autores, serán responsables disciplinariamente los superiores que consintieran las faltas muy graves y graves, así como quienes las indujeran o encubrieran, cuando de dichos actos se deriven graves daños para la Administración o los ciudadanos.

c) Además de los autores, serán responsables disciplinariamente los superiores que consintieran las faltas muy graves, graves y leves, cuando de dichos actos se deriven daños para la Administración o los ciudadanos.

d) Además de los autores, serán responsables disciplinariamente los superiores que consintieran las faltas muy graves, graves, y leves, así como quienes las indujeran o encubrieran, cuando de dichos actos se deriven daños para la Administración o los ciudadanos.

23. El incumplimiento del deber de uso de las tecnologías, en los términos establecidos en la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, por un profesional de la justicia en su primera comunicación con un órgano judicial:

a) No puede ser subsanado dado que se trata de la primera comunicación con un órgano judicial.

b) Puede ser subsanado sin sujeción a plazo dado que se trata de la primera comunicación con un órgano judicial.

c) Puede ser subsanado a requerimiento del órgano judicial en un plazo máximo de cinco días con apercibimiento de que todas sus actuaciones ante ese órgano deberán realizarse empleando medios electrónicos y de conformidad con la Ley 18/2011.

d) Puede ser subsanado a requerimiento del órgano judicial en un plazo máximo de diez días con apercibimiento de que todas sus actuaciones ante ese órgano deberán realizarse empleando medios electrónicos y de conformidad con la Ley 18/2011.

24. El conocimiento de los recursos que se deduzcan en relación con las disposiciones generales emanadas de las Comunidades Autónomas y de las Entidades locales corresponde:

- a) A la Sala de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.
- b) A la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia cuando regulen materias propias de este orden jurisdiccional.
- c) A los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
- d) A los Juzgados de lo Social cuando regulen materias propias de este orden jurisdiccional.

25. El principio de intervención mínima en el Derecho Penal, hace referencia:

- a) A la existencia de determinados procedimientos penales, en concreto los llamados "juicios rápidos", dada la agilidad procesal en su tramitación, siendo mínima la intervención de las partes.
- b) Al carácter de última ratio del Derecho Penal reservándose éste para los ataques más intolerables a los bienes jurídicos.
- c) A la cuestión práctica de la existencia de la nula responsabilidad penal de determinadas personas jurídicas según se establece en la Ley Orgánica 14/2022.
- d) Al carácter de última ratio del Derecho Administrativo, reservándose siempre la aplicación del Derecho Penal para los ataques relativos a los bienes jurídicos de menor entidad.

26. El concepto moderno de la teoría jurídica del delito:

- a) Se recoge en los artículos 1 a 3 del Código Penal.
- b) Se trata de un concepto clásico, en cuya virtud el delito viene configurado por la cualidad del sujeto responsable de la acción.
- c) Se configura exclusivamente con el elemento de la tipicidad.
- d) Tiene como punto de partida el artículo 10.1 del Código Penal.

27. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se corresponde con el error de tipo?

- a) El error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error, atendidas las circunstancias del hecho y las personales del autor, fuera vencible, la infracción será castigada, en su caso, como imprudente.
- b) El error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error fuera vencible, se aplicará la pena inferior en uno o dos grados.
- c) El error invencible sobre un hecho constitutivo de infracción penal no excluye la responsabilidad penal en ningún caso.
- d) El error vencible o invencible, indiferentemente de un tipo u otro, tendrá siempre la consideración de atenuante de la responsabilidad penal.

28. El dolo puede ser:

- a) Consciente e inconsciente.
- b) Directo o de primer grado, directo de segundo grado y eventual.
- c) Negligente, culposo e imprudente.
- d) Completo e incompleto.

29. La exención de responsabilidad penal por estado de necesidad establecida en el artículo 20.5 del Código Penal exige la concurrencia de los siguientes requisitos:

- a) Que al tiempo de cometer la infracción penal, por situación de necesidad, se halle en estado de intoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos, siempre que no haya sido buscado con el propósito de cometerla o no se hubiese previsto o debido prever su comisión, o se halle bajo la influencia de un síndrome de abstinencia, a causa de su dependencia de tales sustancias, que le impida comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión.
- b) Que se trate de una agresión ilegítima. En caso de defensa, en situación de necesidad, de los bienes, se reputará agresión ilegítima el ataque a los mismos que constituya delito y los ponga en grave peligro de deterioro o pérdida inminentes. En caso de defensa de la morada o sus dependencias, se reputará agresión ilegítima la entrada indebida en aquélla o éstas.
- c) Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar, que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto, y que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse.
- d) Que, en estado de necesidad, se ejecute el hecho mediante disfraz, con abuso de superioridad o aprovechando las circunstancias de lugar, tiempo o auxilio de otras personas que debiliten la defensa del ofendido o faciliten la impunidad del delincuente.

30. La circunstancia mixta de parentesco contemplada en el art. 23 del Código Penal hace referencia:

- a) A una circunstancia modificativa de la responsabilidad penal que en ocasiones actúa como agravante y en otros casos como atenuante, en función del tipo de delito.
- b) A la exención de responsabilidad penal siempre, y en todo caso, cuando la persona responsable de la acción u omisión sea cónyuge, hermano, ascendiente o descendiente.
- c) A la exención de responsabilidad civil en aquellos supuestos en que la persona responsable civil subsidiaria sea cónyuge, hermano, ascendiente o descendiente.
- d) A una circunstancia modificativa de la responsabilidad penal que siempre actúa como atenuante en cualquier tipo de delito.

31. Según el artículo 16 del Código Penal y desde el punto de vista de los medios utilizados, los tipos de tentativa son:

- a) Delito imposible y tentativa propiamente dicha.
- b) Tentativa idónea, tentativa inidónea y delito imposible.
- c) El artículo 16 del Código Penal no es el que determina de manera alguna los tipos de tentativa.
- d) Tentativa indirecta, tentativa directa y tentativa eventual.

32. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es la CORRECTA:

- a) El *iter criminis* es el camino o proceso de la ejecución del delito.
- b) El *iter criminis* es un concepto que hace alusión únicamente a la deliberación e ideación del delito por el sujeto activo.
- c) El *iter criminis* es un concepto utilizado por la jurisprudencia a la hora de determinar la ejecución en grado de tentativa.
- d) El *iter criminis* es el camino o proceso relativo a los denominados actos preparatorios para la ejecución de un delito.

33. Tipos de concurso de delitos:

- a) Concurso ideal, concurso intuitivo, concurso culposo y concurso omisivo.
- b) Concurso suficiente, concurso real y concurso omisivo.
- c) Concurso ideal, concurso real y concurso medial.
- d) Concurso medial, concurso negligente y concurso imprudente.

34. La duración de las penas accesorias conforme al artículo 33.6 del Código Penal:

- a) Tendrán la duración mínima de cinco años en todo caso.
- b) Tendrán la duración máxima de 2 años, excepto que, en atención a las necesidades del perjudicado, se establezca un tiempo mayor.
- c) Tendrán la duración máxima de cinco años, exceptuando de su cómputo el tiempo de duración de la instrucción.
- d) Tendrán la duración que respectivamente tenga la pena principal, excepto lo que dispongan expresamente otros preceptos de este Código.

35. Estará exento de responsabilidad criminal:

- a) El que, al tiempo de cometer la infracción penal, tuviere cualquier anomalía o alteración psíquica.
- b) El que, por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia, tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad.
- c) El que, al tiempo de cometer la infracción penal, tuviere un trastorno mental transitorio provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito.
- d) El que obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos, sin ningún otro requisito adicional.

36. En el supuesto de la remisión condicional acordada al amparo del artículo 80.5 del Código Penal, el plazo de suspensión de la ejecución de la pena será:

- a) De dos a cinco años.
- b) De tres a cinco años.
- c) De uno a seis años.
- d) De tres a seis años.

37. De los tres requisitos necesarios para la concesión de la libertad condicional que establece el artículo 90.1 del Código Penal, uno de ellos es:

- a) Que haya extinguido la cuarta parte de la condena.
- b) Que haya accedido a la previa concesión de permisos de salida penitenciarios.
- c) Que el penado se encuentre clasificado en segundo grado de tratamiento penitenciario.
- d) Que haya extinguido las tres cuartas partes de la pena impuesta.

38. Conforme al artículo 96 del Código Penal, ¿cuál de las siguientes se considera una medida de seguridad privativa de libertad?

- a) La libertad vigilada.
- b) La custodia familiar.
- c) El internamiento en centro de deshabitación.
- d) La expulsión del territorio nacional de extranjeros no residentes legalmente en España.

39. Las penas leves impuestas por sentencia firme prescriben:

- a) A los seis meses.
- b) A los dos años.
- c) Al año.
- d) A los tres meses.

40. De conformidad con el artículo 126 del Código Penal, los pagos que se efectúen por el penado o el responsable civil subsidiario para el abono de las responsabilidades pecuniarias se imputarán en primer lugar:

- a) A la reparación del daño causado e indemnización de perjuicios.
- b) A las costas del acusador particular o privado cuando se impusiera en la sentencia su pago.
- c) A la multa.
- d) A la indemnización al Estado por el importe de los gastos que se hubieren hecho por su cuenta en la causa.

41. Conforme al art. 136.1 del Código Penal, la cancelación del antecedente penal derivado de una pena impuesta por delito imprudente precisa, junto con otros requisitos, el transcurso, sin haber vuelto a delinquir, del siguiente plazo de tiempo:

- a) Seis meses.
- b) Dos años.
- c) Un año.
- d) Tres años.

42. Conforme al artículo 140.1 del Código Penal, el delito de asesinato será castigado con la pena de prisión permanente revisable, cuando:

- a) Concurran más de una de las circunstancias previstas en el artículo 139 del Código Penal.
- b) El delito se cometa para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se descubra.
- c) El delito tienda a aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causando a ésta padecimientos innecesarios para la ejecución del delito.
- d) El delito se hubiere cometido por quien pertenece a un grupo u organización criminal.

43. El artículo 163 del Código Penal regula un tipo atenuado del delito de detención ilegal cuando el culpable diera libertad al encerrado o detenido:

- a) Dentro de los tres primeros días de su detención sin haber logrado el objeto que se había propuesto.
- b) Dentro de los quince primeros días de su detención haya logrado o no el objeto que se había propuesto.
- c) Dentro de los tres primeros días de su detención haya logrado o no el objeto que se había propuesto.
- d) Dentro de los diez primeros días de su detención, sin haber logrado el objeto que se había propuesto.

44. En el delito de injurias, ¿exime de la responsabilidad criminal la prueba de la verdad de las imputaciones realizadas?

- a) Sí, cuando las injurias no se hubieran proferido por escrito y con publicidad.
- b) Sí, cuando las injurias se dirijan contra funcionarios públicos sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos o referidos a la comisión de infracciones administrativas.
- c) Sí, cuando las imputaciones no se hayan realizado con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad.
- d) No, en ningún caso, puesto que la "*exceptio veritatis*" solo se admite en las calumnias.

45. Comete un delito de matrimonio ilegal:

- a) El que contrae matrimonio sin tener la edad establecida en el Código Civil.
- b) El que contrae segundo o ulterior matrimonio a sabiendas de que subsiste legalmente el anterior.
- c) El que contrae matrimonio sin haber tramitado previamente el preceptivo expediente.
- d) El que contrae matrimonio fuera del territorio nacional desconociendo que se hallaba vigente un matrimonio anterior.

46. Conforme al artículo 234.3 del Código Penal, la pena leve de multa de uno a tres meses se impone en su mitad superior al que con ánimo de lucro tomare las cosas muebles ajenas, sin la voluntad de su dueño, si la cuantía de lo sustraído no excede de 400 euros:

- a) Cuando en la comisión del hecho se hubieran neutralizado, eliminado o inutilizado los dispositivos de alarma o seguridad instalados en las cosas sustraídas.
- b) Cuando se sustraen cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico.
- c) Cuando se tratare de productos agrarios o ganaderos, se cometa en la explotación agraria o ganadera y se cause un grave perjuicio a la misma.
- d) Cuando se utilice a un menor de 16 años para la comisión del delito.

47.- Conforme al artículo 238 del Código Penal, ¿cuál de las siguientes circunstancias determina la calificación de un delito como robo con fuerza en las cosas?

- a) Obrar con abuso de confianza.
- b) Inutilización de sistemas específicos de alarma o guarda.
- c) Cometer el hecho en despoblado.
- d) Nocturnidad.

48. El artículo 305.1 del Código Penal establece, entre otras, una pena de prisión de uno a cinco años, por un delito contra la Hacienda Pública para aquél que:

- a) Haya eludido el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía exceda de ciento cincuenta mil euros.
- b) Haya eludido el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía exceda de ciento veinte mil euros.
- c) Haya eludido el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía exceda de ciento treinta mil euros.
- d) Haya eludido el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía exceda de ciento cuarenta mil euros.

49. Conforme al artículo 305 del Código Penal, en un delito contra la Hacienda Pública, los jueces y tribunales, podrán imponer la pena inferior en uno o dos grados cuando:

- a) El obligado tributario o autor del delito, satisfaga la deuda tributaria y reconozca los hechos antes de los tres meses desde la citación judicial.
- b) El obligado tributario o autor del delito, satisfaga al menos la mitad de la deuda tributaria y reconozca los hechos antes de los tres meses desde la citación judicial.
- c) El obligado tributario o autor del delito, satisfaga la deuda tributaria y reconozca los hechos antes de los dos meses desde la citación judicial.
- d) El obligado tributario o autor del delito, reconozca los hechos antes de los dos meses desde la citación judicial previo informe favorable del Ministerio Fiscal.

50. Conforme al artículo 305 bis del Código Penal, se agravará la pena en los delitos contra la Hacienda Pública cuando:

- a) La cuantía de la cuota defraudada exceda de cuatrocientos mil euros.
- b) Se oculte o dificulte la determinación de la identidad de la víctima del delito.
- c) La cuantía de la cuota defraudada exceda de quinientos mil euros.
- d) La defraudación se haya cometido en el seno de una organización o de un grupo criminal.

51. Conforme al artículo 307 del Código Penal, por un delito contra la Seguridad Social, será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la cuantía:

a) El que, por acción u omisión, defraude a la Seguridad Social eludiendo el pago de las cuotas de ésta y conceptos de recaudación conjunta, obteniendo indebidamente devoluciones de las mismas o disfrutando de deducciones por cualquier concepto asimismo de forma indebida, siempre que la cuantía de las cuotas defraudadas o de las devoluciones o deducciones indebidas exceda de ciento cincuenta mil euros.

b) El que, por acción u omisión, defraude a la Seguridad Social eludiendo el pago de las cuotas de ésta y conceptos de recaudación conjunta, obteniendo indebidamente devoluciones de las mismas o disfrutando de deducciones por cualquier concepto asimismo de forma indebida, siempre que la cuantía de las cuotas defraudadas o de las devoluciones o deducciones indebidas exceda de quince mil euros.

c) El que, por acción u omisión, defraude a la Seguridad Social eludiendo el pago de las cuotas de ésta y conceptos de recaudación conjunta, obteniendo indebidamente devoluciones de las mismas o disfrutando de deducciones por cualquier concepto asimismo de forma indebida, siempre que la cuantía de las cuotas defraudadas o de las devoluciones o deducciones indebidas exceda de cincuenta mil euros.

d) El que, por acción u omisión, defraude a la Seguridad Social eludiendo el pago de las cuotas de ésta y conceptos de recaudación conjunta, obteniendo indebidamente devoluciones de las mismas o disfrutando de deducciones por cualquier concepto asimismo de forma indebida, siempre que la cuantía de las cuotas defraudadas o de las devoluciones o deducciones indebidas exceda de cuarenta mil.

52. Conforme al artículo 310 del Código Penal, aquél que, estando obligado por ley tributaria a llevar contabilidad mercantil, libros o registros fiscales, lleve contabilidades distintas que, referidas a una misma actividad y ejercicio económico, oculten o simulen la verdadera situación de la empresa, será castigado con la pena de prisión de:

- a) Uno a dos años.
- b) Seis meses a un año.
- c) Tres a seis meses.
- d) Cinco a siete meses.

53. Conforme al artículo 315 del Código Penal, el que, mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impidiere o limitare el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga, será castigado con una pena de:

- a) Seis meses a dos años o multa de seis a doce meses.
- b) Seis meses a dos años o multa de seis a veinticuatro meses.
- c) Dos a cinco años y multa de seis a doce meses.
- d) Dos a cinco años y multa de seis a veinticuatro meses.

54. Serán castigados por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente quienes:

a) Provoquen o realicen directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, incluido el alta mar, con incidencia incluso en los espacios transfronterizos, así como las captaciones de aguas que, por sí mismos o conjuntamente con otros, aunque no sean susceptibles de causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas.

b) Provoquen o realicen únicamente de forma directa emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, incluido el alta mar, con incidencia incluso en los espacios transfronterizos, así como las captaciones de aguas que, por sí mismos o conjuntamente con otros, aunque no sean susceptibles de causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas.

c) Recojan, transporten, valoricen, transformen, eliminen o aprovechen residuos, o no controlen o vigilen adecuadamente tales actividades, de modo que causen o puedan causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas, muerte o lesiones graves a personas, o puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales.

d) Lleven a cabo la explotación de instalaciones en las que se realice una actividad peligrosa o en las que se almacenen o utilicen sustancias o preparados peligrosos no susceptibles de causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, a animales o plantas, muerte o lesiones graves a las personas, o puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales.

55. Cuál de las siguientes circunstancias NO agravaría la pena en los delitos contra los recursos naturales o el medio ambiente conforme al artículo 327 del Código Penal:

- a) Que se hubiese cometido en el marco de una organización criminal o grupo criminal.
- b) Que se haya obstaculizado la actividad inspectora de la Administración.
- c) Que se produzca una extracción ilegal de aguas en período de restricciones.
- d) Que se haya producido un riesgo de deterioro irreversible o catastrófico.

56. Conforme al artículo 340 bis del Código Penal, cuál de las siguientes circunstancias agravará la pena impuesta por un delito contra los animales:

- a) Ejecutar el hecho con alevosía.
- b) Ejecutar el hecho prevaleciendo de su condición de autoridad.
- c) Ejecutar el hecho en presencia de un menor o de una persona especialmente vulnerable.
- d) Ejecutar el hecho de forma anónima.

57. El que matare al Jefe de un Estado extranjero, o a otra persona internacionalmente protegida por un Tratado, que se halle en España, será castigado conforme al Código Penal como autor de un:

- a) Delito contra las Instituciones del Estado.
- b) Delito de terrorismo.
- c) Delito de lesa humanidad.
- d) Delito contra el derecho de gentes.

58. De conformidad con el Código de Comercio, en relación a los libros de los empresarios, marque la respuesta CORRECTA:

a) Todo empresario deberá llevar una contabilidad ordenada, adecuada a la actividad de su empresa que permita un seguimiento de todas sus operaciones, así como la elaboración de balances e inventarios, que sólo es obligatoria al inicio y al cierre de su actividad mercantil.

b) Sólo los socios que hubiesen asistido personalmente a la Junta general podrán obtener en cualquier momento certificación de los acuerdos y de las actas de las Juntas generales.

c) Los empresarios conservarán los libros, correspondencia, documentación y justificantes concernientes a su negocio, debidamente ordenados, durante seis años, a partir del último asiento realizado en los libros, salvo lo que se establezca por disposiciones generales o especiales.

d) El valor probatorio de los libros de los empresarios y demás documentos contables será apreciado por los Letrados de la Administración de Justicia mediante certificación, conforme a las reglas generales del Derecho.

59. ¿A partir de qué momento serán oponibles a terceros de buena fe los actos sujetos a inscripción en el Registro Mercantil, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1 del Código de Comercio?:

a) A partir de la presentación de la solicitud de inscripción.

b) Desde su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

c) Desde su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma.

d) Una vez transcurridos quince días hábiles desde la inscripción.

60. Según lo establecido en el artículo 22 bis del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio:

a) Las sociedades anónimas podrán ser constituidas mediante el procedimiento íntegramente en línea.

b) Se podrá utilizar el procedimiento de constitución íntegramente en línea cuando la aportación de los socios al capital social se realice mediante aportaciones no dinerarias.

c) Los otorgantes no podrán utilizar en la escritura pública notarial del procedimiento íntegramente en línea el modelo de constitución con estatutos tipo.

d) Las operaciones en línea se regirán por lo dispuesto en el título II de la Ley de Sociedades de Capital y en la normativa sectorial que le sea de aplicación.

61. En base a lo estipulado en el artículo 205 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, el plazo de caducidad de la acción de impugnación de los acuerdos sociales que se hubieran adoptado por escrito y no hubieran sido inscritos se computará:

a) Desde la fecha de adopción del acuerdo.

b) Desde la fecha de recepción de la copia del acta.

c) Desde el momento en que se constituya la junta general, en el caso de las sociedades anónimas.

d) Desde la fecha en que sea convocada la junta general.

62. En virtud de lo establecido en el artículo 23.1 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, la Asamblea General ordinaria de la sociedad cooperativa deberá ser convocada:

- a) Por el Consejo Rector, dentro de los seis meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio económico.
- b) Por el Consejo Rector, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio económico.
- c) Por la Intervención, dentro de los seis meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio económico.
- d) Por la Intervención, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio económico.

63. ¿Cuál de los siguientes requisitos resulta obligatorio para que el consumidor pueda desistir de los contratos regulados en la Ley 28/1998, de 13 de julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de dicha Ley?:

- a) La devolución del bien vendido dentro de los diez días hábiles siguientes a su entrega.
- b) Indemnizar al vendedor en un porcentaje del 10 por 100 de los plazos vencidos.
- c) Comunicar el desistimiento al Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles.
- d) No haber usado del bien vendido más que a efectos de simple examen o prueba.

64. ¿Qué invenciones se consideran patentables en base a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes?:

- a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
- b) Las que sean nuevas, impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.
- c) Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas.
- d) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales.

65. En virtud de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, ¿por cuánto tiempo se otorgará y podrá renovarse el registro de una marca?:

- a) Por diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años.
- b) Por cinco años contados desde la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos sucesivos de cinco años.
- c) Por diez años contados desde la fecha de inscripción y podrá renovarse por períodos sucesivos de cinco años.
- d) Por cinco años contados desde la fecha de inscripción y podrá renovarse por períodos sucesivos de cinco años.

66. ¿Qué derecho corresponde al autor de una obra, como irrenunciable e inalienable, a tenor de lo dispuesto en el artículo 14 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril?:

- a) Exigir el reconocimiento de su condición de divulgador de la obra.
- b) Determinar si la divulgación ha de hacerse con su nombre, bajo seudónimo o signo, o anónimamente.
- c) Exigir el desplazamiento de la obra para acceder al ejemplar único o raro de la misma, cuando se halle en poder de otra persona.
- d) Decidir el importe de la compensación equitativa por copia privada.

67. ¿Qué juzgado NO será competente territorialmente para conocer de las acciones previstas en la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, conforme a su artículo 14?:

- a) El Juzgado de lo Mercantil correspondiente al domicilio del demandante.
- b) El Juzgado de lo Mercantil correspondiente al domicilio del demandado.
- c) A elección del demandante, el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde se hubiera realizado la infracción.
- d) A elección del demandante, el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde hubiera producido sus efectos la infracción.

68. Respecto a la designación de beneficiario en un seguro de vida, señale la respuesta CORRECTA:

- a) El tomador del seguro podrá modificar la designación del beneficiario en cualquier momento con el consentimiento del asegurador.
- b) La designación del beneficiario deberá hacerse en la póliza o en testamento.
- c) En caso de designación a favor de los herederos, la prestación se distribuirá en proporción a la cuota hereditaria, salvo pacto en contrario.
- d) En caso de designación a favor de varios beneficiarios, la prestación se distribuirá entre ellos siempre por partes iguales.

69. Conforme a los artículos 131 y 132 de la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque:

- a) El aval en el que no se indique la persona del avalado no es válido.
- b) El aval ha de ponerse necesariamente en el cheque.
- c) La firma de cualquier persona, incluso la del librador, puesta en el anverso del cheque vale como aval.
- d) El pago de un cheque puede garantizarse mediante aval, total o parcialmente.

70. En el expediente de jurisdicción voluntaria de exhibición de libros de las personas obligadas a llevar contabilidad:

- a) La competencia corresponderá al Juzgado de lo Mercantil del domicilio del solicitante o de la persona obligada a la exhibición.
- b) La competencia corresponderá al Juzgado de lo Mercantil del domicilio de la persona obligada a la exhibición o del establecimiento a cuya contabilidad se refieran los libros y documentos de cuya exhibición se trate.
- c) No será preceptiva la intervención de Abogado y Procurador.
- d) Es preceptiva la intervención de Abogado, pero no de Procurador.

71. Conforme a la regulación contenida en la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria, en el expediente para el nombramiento de auditor de una entidad:

- a) La resolución final es una sentencia dictada por el Juez de lo Mercantil.
- b) La resolución final es un auto dictado por el Juez de lo Mercantil.
- c) La resolución final es un decreto dictado por el Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Mercantil.
- d) El Letrado de la Administración de Justicia convocará a una comparecencia citando a los interesados, y tras ser oídos, les comunicará su decisión en el acto.

72. Según artículo 135 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria, sobre el expediente de jurisdicción voluntaria por robo, hurto, extravío o destrucción de título valor, marque la respuesta que NO es correcta:

- a) El Letrado de la Administración de Justicia acordará el anuncio de la incoación del expediente en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma.
- b) Incoado el expediente, el Letrado de la Administración de Justicia lo comunicará al emisor de los valores.
- c) El Letrado de la Administración de Justicia acordará el anuncio de la incoación del expediente en el Boletín Oficial del Estado.
- d) Incoado el expediente, si se trata de un título admitido a negociación, el Letrado de la Administración de Justicia lo comunicará a la Sociedad Rectora del mercado secundario oficial correspondiente.

73. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, NO es un derecho de las personas ante el Registro Civil:

- a) El derecho a un nombre y a ser inscrito mediante la apertura de un registro individual y la asignación de un código personal.
- b) El derecho a obtener certificaciones.
- c) El derecho a utilizar indistintamente ante las oficinas del Registro Civil cualquiera de las lenguas oficiales de España.
- d) El derecho a la intimidad en relación con datos especialmente protegidos sometidos a régimen de publicidad restringida.

74. Según el artículo 20 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, el Registro Civil se estructura en:

- a) Oficina Central, Oficinas Generales y Oficinas Consulares.
- b) Oficina Central, Oficinas Generales, Oficinas Municipales y Oficinas Consulares.
- c) Oficina Central, Oficinas Provinciales y Oficinas Consulares.
- d) Oficina Central, Oficinas Generales, Oficinas Consulares y Oficinas Autonómicas en el territorio de aquellas Comunidades Autónomas que tienen transferidas las competencias en materia de justicia.

75. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, es título suficiente para inscribir el hecho o acto que accede al Registro Civil:

- a) El documento auténtico, sea judicial, administrativo, notarial o registral, siempre que sea original.
- b) El documento auténtico, sea judicial, notarial o registral, sea original o testimonio, pero en ningún caso un documento administrativo.
- c) El documento auténtico, sea judicial, administrativo, notarial o registral, sea original o testimonio.
- d) El documento auténtico judicial, sea original o testimonio, y el documento administrativo, notarial o registral siempre que sea original.

76. Conforme al artículo 40 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, cuál de los siguientes actos NO puede ser objeto de anotación:

- a) El procedimiento judicial en trámite que puede afectar al contenido del Registro Civil.
- b) Las declaraciones con valor de presunción.
- c) La guarda de hecho.
- d) La resolución extranjera que afecte al estado civil, una vez obtenga el *exequátur* o el reconocimiento incidental en España.

77. Señale la afirmación CORRECTA acerca de la inscripción de nacimiento:

- a) Respecto de los nacimientos que se hayan producido fuera de establecimiento sanitario, o cuando por cualquier causa no se haya remitido el documento por los centros sanitarios, los obligados a promover la inscripción dispondrán de un plazo de veinte días para declarar el nacimiento ante la Oficina del Registro Civil o las Oficinas Consulares de Registro Civil.
- b) La dirección de hospitales, clínicas y establecimientos sanitarios comunicará en el plazo de cuarenta y ocho horas a la Oficina del Registro Civil que corresponda cada uno de los nacimientos que hayan tenido lugar en el centro sanitario, excepto aquellos casos que exijan personarse ante el Encargado del Registro Civil.
- c) Respecto de los nacimientos que se hayan producido fuera de establecimiento sanitario, o cuando por cualquier causa no se haya remitido el documento por los centros sanitarios, los obligados a promover la inscripción dispondrán de un plazo de treinta días para declarar el nacimiento ante la Oficina del Registro Civil o las Oficinas Consulares de Registro Civil.
- d) La dirección de hospitales, clínicas y establecimientos sanitarios comunicará en el plazo de setenta y dos horas a la Oficina del Registro Civil que corresponda cada uno de los nacimientos que hayan tenido lugar en el centro sanitario, excepto aquellos casos que exijan personarse ante el Encargado del Registro Civil.

78. Las resoluciones y actos de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública:

- a) Pueden ser impugnados siempre ante el Juzgado de Primera Instancia de la capital de provincia del domicilio del recurrente.
- b) Pueden ser impugnados siempre ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la capital de provincia del domicilio del recurrente
- c) Pueden ser impugnados ante el Juzgado de Primera Instancia de la capital de provincia del domicilio del recurrente, salvo si se refieren a la solicitud de nacionalidad por residencia, respecto a los cuales no cabe recurso.
- d) Pueden ser impugnados ante el Juzgado de Primera Instancia de la capital de provincia del domicilio del recurrente, salvo si se refieren a la solicitud de nacionalidad por residencia, que se someten a la jurisdicción contencioso-administrativa.

79. De conformidad con el artículo 4.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, la competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo se extiende al conocimiento y decisión de las cuestiones prejudiciales e incidentales no pertenecientes al orden administrativo siempre que sean:

- a) De carácter constitucional, y cuando así lo dispongan los Tratados internacionales.
- b) Directa o indirectamente relacionadas con el fondo del asunto y sean de carácter constitucional y penal.
- c) Directamente relacionadas con un recurso contencioso-administrativo, salvo las de carácter constitucional y penal y lo dispuesto en los Tratados internacionales.
- d) Directamente relacionadas con un recurso contencioso-administrativo, según lo dispuesto en los Tratados internacionales.

80. Conforme al artículo 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tienen la consideración de Administración Pública:

- a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local y el sector público institucional previsto en el artículo 2.1.d) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- b) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, así como los organismos públicos y entidades de Derecho Público previstos en el artículo 2.2.a) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- c) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local y las Universidades Públicas.
- d) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, las Universidades Públicas y las Corporaciones de Derecho Público, cuando ejerzan competencias delegadas por una Administración Pública.

81. De acuerdo con el artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, relativo a la prescripción en el ámbito de la potestad sancionadora, marque la respuesta CORRECTA:

- a) El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquél en que se hubiera dictado la Resolución sancionadora.
- b) El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera comenzado a instruir.
- c) Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan.
- d) Las infracciones muy graves prescribirán a los cuatro años, las graves a los dos años y las leves, a los seis meses.

82. En relación con la eficacia de los actos administrativos, señale la respuesta CORRECTA:

- a) Las resoluciones administrativas de carácter particular pueden vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general si proceden de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.
- b) Son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria, así como aquellas que incurran en alguna de las causas recogidas en el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- c) Los actos de las Administraciones Públicas no tienen carácter ejecutivo.
- d) Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde el día siguiente a la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

83. La caducidad de la demanda se declarará, conforme a la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa:

- a) De oficio, por Decreto, si la demanda no se hubiere presentado dentro del plazo.
- b) De oficio, por Auto, si la demanda no se hubiere presentado dentro del plazo.
- c) A instancia de la parte recurrida, por Decreto, si la demanda no se hubiere presentado dentro del plazo.
- d) A instancia de la parte recurrida, por Auto, si la demanda no se hubiere presentado dentro del plazo.

84. El Letrado de la Administración de Justicia requerirá a la Administración el expediente administrativo, que deberá ser remitido, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo improrrogable de:

- a) Veinte días, a contar desde que la comunicación judicial tenga entrada en el registro general del órgano requerido.
- b) Dos meses, a contar desde que la comunicación judicial tenga entrada en el registro general del órgano requerido.
- c) Tres meses, a contar desde que la comunicación judicial tenga entrada en el registro general del órgano requerido.
- d) Treinta días, a contar desde que la comunicación judicial tenga entrada en el registro general del órgano requerido.

85. En relación con la suspensión prevista en el artículo 54 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, una vez presentada la demanda y dado traslado de la misma por el Letrado de la Administración de Justicia a las demás partes demandadas que hubieran comparecido, con entrega del expediente administrativo, para que la contesten en el plazo de 20 días, señale la respuesta CORRECTA:

- a) Se acordará de oficio la suspensión si el Letrado de la Administración de Justicia considera que la disposición o actuación administrativa recurrida pudiera no ajustarse a Derecho.
- b) Se prevé que, una vez dado traslado de la demanda para contestar, no cabe ninguna suspensión.
- c) El Letrado de la Administración de Justicia la acordará de oficio, por la solicitud del defensor de la Administración demandada, en el caso de que la demanda fuere de extensión superior a la permitida para la interposición de recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
- d) El Letrado de la Administración de Justicia acordará lo procedente sobre la suspensión, a solicitud del defensor de la Administración demandada, si éste considera que la disposición o actuación administrativa recurrida pudiera no ajustarse a Derecho, previa audiencia del demandante.

86. De acuerdo con el artículo 59.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, el auto desestimatorio de las alegaciones previas es susceptible de:

- a) Recurso de reposición.
- b) Recurso de apelación.
- c) Recurso de reposición, cuando impida la continuación del procedimiento.
- d) No es susceptible de recurso.

87. De conformidad con el artículo 72.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, la sentencia que declare la inadmisibilidad o desestimación del recurso contencioso administrativo produce efectos:

- a) Solo entre las partes.
- b) Entre las partes, pero podrán extenderse a terceros en los términos previstos en los artículos 110 y 111.
- c) Respecto de todos los interesados.
- d) Únicamente respecto del recurrente.

88. De conformidad con el artículo 287 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, ¿es necesario un plazo de espera para la ejecución de sentencias dictadas frente a Entes públicos?

- a) Sí, se exige un plazo general de 20 días de espera, contados desde la firmeza de la sentencia, para instar la ejecución; salvo que el Juez fije uno menor, atendidas las circunstancias del caso y personales del actor.
- b) No, se decreta de oficio por el Letrado de la Administración de Justicia la ejecución, una vez dictada la sentencia.
- c) Sí, la parte interesada podrá solicitar la ejecución una vez transcurrido el plazo de dos meses a partir de su firmeza, o plazo inferior si así se hubiere fijado en la sentencia.
- d) Las Sentencias dictadas frente a Entes públicos en el orden jurisdiccional social se configuran como un supuesto *ex lege* de inejecución por motivos de orden público.

89. En relación con los anticipos reintegrables, ¿cuál es la respuesta CORRECTA?

- a) El Estado garantiza su reintegro si en la sentencia de la que deriva el anticipo hubiera sido condenado el trabajador.
- b) La cantidad de los anticipos no puede exceder anualmente, y para todos los trabajadores de la empresa, del triple del salario mínimo interprofesional fijado para trabajadores mayores de dieciocho años.
- c) Alcanzarán, como máximo total, hasta el 50% del importe de la cantidad reconocida en la sentencia favorable al trabajador que hubiere condenado al empresario al pago y hubiere sido recurrida.
- d) Alcanzarán, como máximo total, hasta el 50% del importe de la cantidad reconocida en la sentencia que hubiere condenado al trabajador al pago y hubiere sido recurrida.

90. El artículo 3 del Estatuto de los Trabajadores enumera las fuentes de la relación laboral, disponiendo que los derechos y obligaciones de la relación laboral se regulan:

- a) Por disposiciones legales estatales o autonómicas.
- b) Por disposiciones legales y reglamentarias del Estado.
- c) Por disposiciones legales o reglamentarias estatales, autonómicas y locales
- d) Por disposiciones legales o convencionales estatales o autonómicas.

91. Según el artículo 82.2 del Estatuto de los Trabajadores, mediante los convenios colectivos los trabajadores y empresarios regulan:

- a) Las condiciones de trabajo, salarios, clasificación profesional y régimen sancionador.
- b) Las condiciones de trabajo y de productividad y en su caso la paz laboral.
- c) Las condiciones de trabajo con preferencia a lo dispuesto en las normas reglamentarias, el régimen sancionador y la paz laboral.
- d) Las condiciones de trabajo, causas de despido del sector empresarial correspondiente y salarios.

92. Con relación a la forma y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Estatuto de los Trabajadores, de no observarse la forma escrita del contrato de trabajo, este se presumirá celebrado:

- a) Por tiempo indefinido y a jornada completa, salvo prueba en contrario.
- b) Hay libertad de forma y si es verbal, su contenido se presume en relación con las circunstancias de la prestación del servicio.
- c) Las condiciones de trabajo deben pactarse siempre por escrito para que el contrato de trabajo sea válido.
- d) Las condiciones de trabajo y el salario deben pactarse siempre por escrito para que el contrato de trabajo sea válido.

93. De acuerdo con el artículo 11.2.d), del Estatuto de los Trabajadores, en el contrato de formación en alternancia, la persona contratada contará con:

- a) Una sola persona tutora designada, de común acuerdo por la empresa y por el centro o entidad de formación.
- b) Una sola persona tutora designada por el entidad o centro de formación.
- c) Una sola persona tutora designada por la empresa, perteneciente a su plantilla.
- d) Una persona tutora designada por el centro o entidad de formación y otra persona tutora designada por la empresa.

94. De acuerdo con el artículo 49.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, el contrato de trabajo se extinguirá por dimisión del trabajador, debiendo mediar el preaviso:

- a) De quince días.
- b) De un mes.
- c) De quince días, salvo que en convenio se señale otro.
- d) Que señalen los convenios colectivos o la costumbre del lugar.

95. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 62.1 del Estatuto de los Trabajadores, la representación de estos en la empresa o centro de trabajo corresponde a los delegados de personal, siempre que:

- a) Cuenten entre seis y diez trabajadores.
- b) Cuenten con más de diez y menos de cincuenta trabajadores.
- c) Cuenten con más de seis y menos de cincuenta trabajadores.
- d) La existencia de delegados de personal en una empresa de menos de cincuenta trabajadores está determinada por lo que dispongan los convenios colectivos.

96. Según el artículo 63.3 del Estatuto de los Trabajadores, los comités intercentros tendrán las funciones que:

- a) Expresamente se les conceda en el convenio colectivo que acuerda su creación.
- b) Las enumeradas en el Estatuto de los Trabajadores.
- c) Las enumeradas en el Estatuto de los Trabajadores y en los convenios colectivos del sector.
- d) No está contemplada normativamente la existencia de los comités intercentros.

97. De acuerdo con el artículo 5.3 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, la declaración de oficio de la falta de competencia internacional por un órgano judicial del orden social requerirá previa audiencia:

- a) Únicamente del demandante, pues se acuerda al tiempo de presentar la demanda.
- b) Únicamente del demandado, que la alegará al contestar a la demanda.
- c) Lo resuelve el Juzgado sin audiencia previa de ninguna parte.
- d) De las partes y del Ministerio Fiscal.

98. De conformidad con el artículo 2.c) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, los órganos jurisdiccionales del orden social conocerán de las cuestiones litigiosas que se promuevan entre las sociedades laborales y sus socios trabajadores:

- a) Exclusivamente por la prestación de sus servicios.
- b) Cuestión de cualquier orden que se susciten entre ellos.
- c) El orden social no tiene competencia para conocer de las cuestiones litigiosas entre estas sociedades y sus socios trabajadores.
- d) El citado artículo atribuye el conocimiento de las cuestiones litigiosas entre estas sociedades y sus socios trabajadores a los Juzgados de lo Mercantil.

99. Según el artículo 23.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, en los supuestos de empresas incursas en procedimientos concursales, el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) será citado como parte:

- a) Cuando lo solicite el demandado al tiempo de contestar la demanda.
- b) Cuando solicitándolo cualquiera de las partes, así lo acuerde el Juez.
- c) Por el Letrado de la Administración de Justicia, de oficio.
- d) En estos supuestos el FOGASA nunca asume la condición procesal de parte.

100. De acuerdo con el artículo 81.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, de qué plazo dispone el Letrado de la Administración de Justicia, a contar desde la recepción de la demanda, para requerir a las partes si entiende que concurre un supuesto de falta de competencia:

- a) Cinco días.
- b) Dos días.
- c) Tres días.
- d) Diez días.

PREGUNTAS RESERVA

101. Las sentencias definitivas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de conformidad con lo dispuesto en artículo 51 del Convenio Europeo de Derechos Humanos:

- a) Se adoptan solo por unanimidad.
- b) Se adoptan por mayoría y cualquier Magistrado tendrá derecho a unir a ella su opinión individual.
- c) Se adoptan por mayoría y el Magistrado disidente tiene derecho a expresar su opinión individual.
- d) Se adoptan por unanimidad sin que ningún Magistrado tenga derecho a unir a ella su opinión cuando sea concurrente con la opinión unánime.

102. En relación a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, conforme al artículo 31 bis, apartado 3, del Código Penal, señale la respuesta CORRECTA:

- a) En todas las personas jurídicas, la función legal de supervisión será ejercida siempre por un órgano externo a la misma, determinado por el órgano de administración de la empresa, siempre que éste último sea colegiado.
- b) En las personas jurídicas constituidas bajo la forma de sociedad de responsabilidad limitada, no serán nunca responsables de la comisión de delito alguno, si su órgano de administración es un consejo de administración, eximiéndoles por ello de funciones de supervisión.
- c) En las personas jurídicas de pequeñas dimensiones, las funciones de supervisión a que se refiere la condición 2.ª del apartado 2 podrán ser asumidas directamente por el órgano de administración. A estos efectos, son personas jurídicas de pequeñas dimensiones aquellas que, según la legislación aplicable, estén autorizadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada.
- d) En las pequeñas mercantiles, entendiendo como tales exclusivamente a las sociedades con un volumen de negocio neto anual inferior a los 3.000 euros, las funciones de supervisión a las que se refiere la condición 3ª del apartado 2, serán asumidas directamente en el caso de tener externalizadas la gestión de sus cuentas contables, por dicho organismo o persona física o jurídica.

103. ¿Cuál de las siguientes obligaciones corresponde al agente dentro del contrato de agencia, en virtud de lo declarado por el artículo 9 de la Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre Contrato de Agencia?:

- a) Satisfacer la remuneración pactada.
- b) Poner a disposición del empresario, con antelación suficiente y en cantidad apropiada, los muestrarios, catálogos, tarifas y demás documentos necesarios para el ejercicio de su actividad profesional.
- c) Llevar una contabilidad independiente de los actos u operaciones relativos a cada empresario por cuya cuenta actúe.
- d) Advertir al empresario, desde que tenga noticia de ello, cuando prevea que el volumen de los actos u operaciones va a ser sensiblemente inferior al que el empresario hubiera podido esperar.

104. Señale la respuesta que NO es correcta. Dispone el artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores, que el Gobierno fijará el salario mínimo interprofesional teniendo en cuenta:

- a) La coyuntura económica general.
- b) El índice de precios al consumo.
- c) La productividad media nacional alcanzada.
- d) Desviación del indicador público de renta.

